OFICIO No. *****
EXPEDIENTE No.: *****
QUEJOSO: N1
RESOLUCIÓN: ACUERDO DE
CONCILIACIÓN
1/2013

LIC. MARCO ANTONIO HIGUERA GÓMEZ,
Procurador General de Justicia del Estado de Sinaloa,
Ciudad.

Por el presente expreso a usted que el día 30 de abril de 2012, el señor N1 presentó escrito de queja ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el que refirió actos presuntamente transgresores de derechos humanos cometidos en su perjuicio, por parte de personal de la agencia primera del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, Sinaloa.

Dichos actos fueron calificados como presuntamente transgresores de derechos humanos, razón por la que, en los términos de lo que dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se inició la investigación respectiva, misma que quedó registrada al interior de este organismo bajo el expediente anotado al margen superior derecho, en el cual se practicaron las siguientes diligencias.

1. En fecha 4 de mayo de 2012, mediante oficio número *****, se solicitó al agente primero del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, Sinaloa, el informe de ley relacionado con los actos motivo de la queja.

2. Con oficio número ***** de fecha 11 de mayo de 2012, dicho servidor público refirió que efectivamente en esa representación social a su cargo se encuentra registrada la averiguación previa penal número *****, motivado por la comisión de los delitos de abuso de confianza, fraude y los que resulten en perjuicio del patrimonio económico de

los señores N1, N2, N3 y N4, en la cual se han realizado una serie de diligencias con la finalidad de obtener mayores y mejores elementos de prueba, ello para estar en la posibilidad de resolver conforme a derecho, siendo el estado actual de la indagatoria en trámite.

Asimismo, expresó que dicha indagatoria está bajo la responsabilidad de la licenciada N5, agente auxiliar del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, Sinaloa.

3. Que el día 24 de mayo de 2012, personal de este Organismo Estatal entabló comunicación telefónica con el licenciado N6, agente primero del Ministerio Público del fuero común en Culiacán, Sinaloa, a efecto de conocer el estado actual de la averiguación previa penal *****, refiriendo dicho servidor público que se estaba analizando la procedencia de solicitar la pericial a efecto de determinar si existe firma apócrifa respecto de los hechos denunciados, ello con la finalidad de apoyar en la investigación a la auxiliar que la tiene a cargo.

Dicha situación se le informó al señor N1 el día 28 de mayo de 2012, manifestando que acudiría ante el agente del Ministerio Público con el propósito de programar la ratificación de algunos escritos de promoción.

4. Que el día 3 de julio de 2012, personal de este Organismo Estatal entabló comunicación telefónica con el licenciado N6, agente primero del Ministerio Público del fuero común en Culiacán, Sinaloa, a efecto de conocer el estado actual de la averiguación previa penal *****, a lo que manifestó que el señor N1 acababa de ratificar un escrito de promoción y que la pericial para determinar que la firma que obra en un poder, que según lo manifestado por el quejoso es falsa, ya fue solicitada a la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales.

Asimismo, refirió que no se han aportado a la averiguación previa los documentos originales para que se practique dicha pericial, como tampoco se

ha expresado en qué lugar se encuentran, no obstante de que ya se le informó al quejoso de tal necesidad.

5. El día 4 de julio de 2012, personal de este Organismo Estatal entabló comunicación telefónica con el señor N1 a efecto de hacer de su conocimiento lo manifestado por la autoridad, refiriendo el mismo que únicamente tienen copias certificadas del documento que les requieren, que el documento original se encuentra en el Registro Agrario Nacional, que una vez que corrobore tal información la proporcionará al agente del Ministerio Público.

6. Con motivo de allegarnos de información que permita la completa integración del expediente que nos ocupa, esta CEDH mediante oficio número ***** de fecha 4 de julio de 2012, concedió al quejoso un plazo de diez días, computables a partir de la fecha en que le sea notificado dicho oficio, para que expresara lo que a su derecho conviniera, en el entendido que podrá aportar las pruebas pertinentes para, en su caso, desvirtuar las afirmaciones hechas por la autoridad y sustentar las suyas, independientemente de las pruebas que esta Comisión diligencie.

7. Que en fecha 6 de agosto de 2012, se recibió escrito de misma fecha, signado por el señor N1, mediante el cual hizo diversas manifestaciones respecto los hechos expresados en su escrito de queja.

8. En fecha 23 de agosto de 2012, se asentó en acta circunstanciada la comunicación del señor N2 a esta CEDH, refiriendo ser hermano de N1 y que éste falleció.

9. El día 24 de agosto de 2012, personal de esta Comisión Estatal realizó llamada telefónica a la agencia primera del Ministerio Público del fuero común en Culiacán, Sinaloa, atendiendo la misma el licenciado N6, quien después de conocer el motivo de la llamada, dijo que la averiguación previa ***** aún se encuentra en trámite, que falta definir unas testimoniales que a su juicio resultan irrelevantes para la acreditación del

delito correspondiente, sin embargo tenían que hacerlo ya que el expediente estaba por resolverse.

Del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve, este Organismo Estatal pudo acreditar actos violatorios de derechos humanos como son a la legalidad y seguridad jurídica, derivados de una deficiente prestación del servicio, en atención a las siguientes consideraciones:

De las constancias y evidencias que integran el referido expediente, se advierte que el día 28 de septiembre de 2011, el señor N1 formuló denuncia y/o querrela por los delitos de abuso de confianza, fraude y los que resulten, cometidos en perjuicio del patrimonio económico del mismo, de N2, N3 y N4, misma que fue remitida para el inicio de la averiguación previa e investigación respectiva a la agencia primera del Ministerio Público del fuero común en Culiacán, Sinaloa.

De las evidencias con que cuenta esta CEDH, se desprende que dicha representación social ha omitido la función investigadora de los delitos bajo el principio de prontitud, pues a la fecha en que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos solicitó el informe de ley correspondiente tenía 6 meses inactiva, ello en virtud de que se señaló como última diligencia la efectuada el 4 de noviembre de 2011, consistente en la declaración del indiciado N7 y la remisión de copias certificadas del expediente clínico a nombre de N8.

Además puede advertirse de las actas existentes que en la citada investigación no se han llevado a cabo actuaciones que en un principio fueron consideradas como necesarias, tal es el caso de la prueba pericial que se pretendía solicitar respecto de documentos, según el dicho del propio quejoso y corroborado por el agente titular del Ministerio Público del fuero común, la cual, de acuerdo a lo expresado, no se llevó a cabo por no considerarlo necesario.

Circunstancia que también ocurrió respecto de las testimoniales ofrecidas por los demandantes y/o querellantes, mismos que adujo el quejoso no le fueron desahogadas en diferentes ocasiones, no obstante que se le ha fijado la fecha correspondiente para tal efecto; mismos que finalmente son considerados por el representante social como necesario su desahogo, previo a la resolución respectiva.

De tal manera que con ello se violentó lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“... La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliara con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.”

En tal virtud y como lo establece el artículo 3° del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, el Ministerio Público en el ejercicio de su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción penal, deberá practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y en su caso acreditar la probable responsabilidad, así como la reparación del daño.

Sin embargo, para poder emitir cualquier resolución, ya sea el ejercicio de la acción penal o bien el no ejercicio, deberá primero contar con las probanzas necesarias derivado de una debida integración de la averiguación previa, situación que personal de la agencia primera del Ministerio Público del fuero común de Culiacán dejó de observar, a pesar de que la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado les mandata a procurar la observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho, apegando su proceder a los principios de unidad de actuación, legalidad, protección social, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos.

En el caso que nos ocupa, el servidor público a cuyo cargo se encuentra la averiguación previa analizada no cumplió legalmente con la integración

debida, ya que desde el 4 de noviembre de 2011, fecha en que se recibió la declaración del indiciado y copias certificadas del expediente clínico de N8, se observó la ausencia de acción por parte del agente primero del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, Sinaloa, respecto al pronunciamiento de cualquier resolución dentro de la misma.

Lo anterior viene a contrariar los principios que rigen el actuar de los agentes del Ministerio Público en el Estado, mismos que se enfocan a destacar que la investigación debe ser pronta y expedita a efectos de lograr una debida procuración de justicia pues de lo contrario se propicia una limitación al acceso a la justicia, a recibir indemnización y a la reparación del daño correspondiente.

En ese contexto, el Estado debe crear las condiciones materiales y humanas a efecto de dirimir controversias entre partes de manera pronta y eficaz, por lo que los servidores públicos en comento están propiciando, además del descrédito social a su imagen como servidores públicos, un descrédito a la capacidad estatal de producir justicia, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales previamente establecidos y en los plazos y términos que fijen las leyes.

En consecuencia, el servidor público de referencia al cumplir deficientemente el servicio público que le fue encomendado inobservó, además de preceptos constitucionales, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, al dejar sin actividad la indagatoria penal durante 6 meses, no existiendo justificación legal alguna para comprender la dilación prolongada en las actuaciones de dicha averiguación previa, pues las diligencias que a esas fechas se encontraban pendientes por desahogar, no representaban impedimento alguno para su realización, bastaba con la voluntad del servidor público para su desahogo.

Que además de transgredir nuestra legislación, se violentó por el personal de la agencia primera del Ministerio Público del fuero común de Culiacán instrumentos internacionales, tales como:

Convención Americana sobre los Derechos Humanos:

“Artículo 8.

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre:

“Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra los actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, algunos de los derechos consagrados constitucionalmente.”

Así, de los ordenamientos legales invocados la omisión de dicho funcionario público fue por demás obvia incumpliendo con la tarea que de manera exclusiva se le confiere, teniendo como consecuencia una indebida procuración de justicia en perjuicio del señor N1, quejoso o bien del resto de los ofendidos, ante la ausencia de éste.

En razón de lo anterior, con el propósito de promover prácticas que redunden en una mejor protección de los derechos humanos, así como a fin de dar una solución inmediata a la problemática que se estudia, de conformidad con lo estatuido por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 7°, fracción VIII y 43 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 85, 86, 87, 88 y 89 de su Reglamento Interno, este organismo formula ante usted señor Procurador General de Justicia del Estado, el siguiente:

ACUERDO DE CONCILIACIÓN

PRIMERO. Instruya al agente primero del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, Sinaloa, para que le garantice a los ofendidos en la citada averiguación previa penal el derecho a una debida procuración de justicia prevista por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Gire instrucciones a personal de la agencia primera del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, Sinaloa, para que en cumplimiento de su deber, a la mayor brevedad, realice las diligencias que técnica y legalmente resulten procedentes y las que producto de éstas resulten necesarias para la debida integración de la averiguación previa número *****, y conforme a su resultado emitan con la mayor prontitud la resolución que en Derecho corresponda.

TERCERO. Se giren instrucciones al agente primero del Ministerio Público del fuero común de Culiacán, Sinaloa, para que en todo momento garantice a las víctimas u ofendidos del delito dentro de las averiguaciones previas los derechos consignados a su favor en el artículo 20, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. Se giren instrucciones a quien corresponda a efecto de que personal del Ministerio Público a su cargo sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deben observar a fin de respetar los derechos humanos de las personas en el desempeño de sus funciones y evitar que estos actos se repitan.

De aceptarse el Acuerdo de Conciliación y durante los cinco días hábiles siguientes esa Procuraduría General de Justicia del Estado no cumple totalmente con lo estipulado en la misma, podrá el señor N2, a falta de su hermano quejoso N1, hacerlo del conocimiento de este organismo, para que dentro de las setenta y dos horas siguientes el expediente del caso se reabra y determinar las acciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

De no aceptarse dicho Acuerdo, la consecuencia inmediata será la preparación del proyecto de recomendación correspondiente, tal y como lo establece el numeral 88, del citado ordenamiento legal.

Dada la naturaleza jurídica del presente Acuerdo de Conciliación, de conformidad con lo estatuido por el artículo 87, del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuenta con un plazo de cinco días hábiles, computables a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, para que manifieste a esta Comisión si acepta el Acuerdo de Conciliación, solicitándosele expresamente que, en caso de que no la acepte, motive y fundamente la no aceptación, esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por este organismo estatal carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y, específicamente, de su protesta de guardar la Constitución, lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y otra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Culiacán Rosales, Sin., a 25 de marzo de 2013
El Presidente

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO

C.c.p. N2, quejoso. Para su conocimiento.
C.c.p. Expediente.
C.c.p. Minutario.